Fallo

- 1) Desestimar el recurso de casación.
- 2) Condenar en costas a France Télécom SA.

(¹) DO C 170, de 21.7.2007.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de abril de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona) — Pedro IV Servicios, S.L./Total España, S.A.

(Asunto C-260/07) (¹)

[Competencia — Prácticas colusorias — Artículo 81 CE — Contrato de suministro exclusivo de carburantes y combustibles — Exención — Reglamento (CEE) n° 1984/83 — Artículo 12, apartado 2 — Reglamento (CEE) n° 2790/1999 — Artículos 4, letra a), y 5, letra a) — Duración de la exclusividad — Fijación del precio de venta al público]

(2009/C 141/04)

Lengua de procedimiento: español

Órgano jurisdiccional remitente

Audiencia Provincial de Barcelona

Partes en el procedimiento principal

Demandante: Pedro IV Servicios, S.L.

Demandada: Total España, S.A.

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretación del artículo 81 CE, apartado 1, letra a), del octavo considerando y de los artículos 10 y 12, apartados 1, letra c), y 2, del Reglamento (CEE) n° 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva (DO L 173, p. 5; EE 08/02, p. 114), y de los artículos 4, letra a), y 5 del Reglamento (CE) n° 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 336, p. 21) — Convenio de distribución exclusiva de carburantes y de combustibles entre un suministrador y el explotador de una estación de servicio — Necesidad de que el suministrador sea propietario del suelo y de las instalaciones de la estación de servicio o suficiencia de otros títulos jurídicos que le habiliten para arrendar la estación de servicio a un revendedor que es propietario del suelo en el que se sitúa la estación de servicio — Restricción de la libertad del revendedor de determinar su precio de venta.

Fallo

- 1) El artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CEE) n° 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del

apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1582/97 de la Comisión, de 30 de julio de 1997, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la aplicación de la excepción que preveía, no exigía que el proveedor fuera propietario del terreno sobre el que hubiera construido la estación de servicio arrendada al revendedor.

- 2) El artículo 5, letra a), del Reglamento (CE) n° 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la aplicación de la excepción que prevé, exige que el proveedor sea propietario tanto de la estación de servicio que arrienda al revendedor como del terreno sobre el que aquélla está construida o que, en el caso de no ser propietario, los arriende a terceros no vinculados con el revendedor.

- 3) Las cláusulas contractuales relativas a los precios de venta al público, como las controvertidas en el litigio principal, pueden acogerse a la exención por categorías en virtud del Reglamento n° 1984/83, en su versión modificada por el Reglamento n° 1582/97, y del Reglamento n° 2790/99, si el proveedor se limita a imponer un precio de venta máximo o a recomendar un precio de venta y si, por lo tanto, el revendedor tiene una posibilidad real de determinar el precio de venta al público. En cambio, dichas cláusulas no pueden acogerse a las referidas exenciones si conducen, directamente o a través de medios indirectos o subrepticios, a la fijación del precio de venta al público o a la imposición del precio de venta mínimo por el proveedor. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar si se imponen estas restricciones al revendedor, teniendo en cuenta el conjunto de obligaciones contractuales consideradas en su contexto económico y jurídico, así como el comportamiento de las partes del litigio principal.

(¹) DO C 183, de 4.8.2007.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 23 de abril de 2009 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Rechtbank van Koophandel te Antwerpen — Bélgica) — VTB-VAB NV (C-261/07), Galatea BVBA (C-299/07)/Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)

(Asunto C-261/07 a C-299/07) (¹)

(Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales — Normativa nacional que prohíbe las ofertas conjuntas a los consumidores)

(2009/C 141/05)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Partes en el procedimiento principal

Demandante: VTB-VAB NV (C-261/07), Galatea BVBA (C-299/07)

Demandada: Total Belgium NV (C-261/07), Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07)

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Bélgica) — Interpretación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149, p. 22) — Normativa nacional que prohíbe las ofertas conjuntas a los consumidores.

Fallo

La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en los litigios principales, que, salvo determinadas excepciones y sin tener en cuenta las circunstancias específicas del caso de autos, prohíbe cualquier oferta conjunta realizada por un vendedor a un consumidor.

(¹) DO C 199, de 25.8.2007.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de abril de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de Bélgica

(Asunto C-287/07) (¹)

(Incumplimiento de Estado — Contratos públicos — Directiva 2004/17/CE — Procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales — Adaptación incorrecta o incompleta del Derecho interno — No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado)

(2009/C 141/06)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Stromsky, D. Kukovec y M. Konstantinidis, agentes)

Demandada: Reino de Bélgica (representantes: D. Haven y J.-C. Halleux, agentes)

Objeto

Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de todas las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2004/17/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO L 134, p. 1).

Fallo

1) — Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno de una forma completa y correcta al artículo 1, apartado 2, letras b) y c), segundo párrafo, y d), y apartado 13, párrafo segundo, al artículo 14, apartado 4, al artículo 17, apartado 10, letras a) y c), al artículo 34, apartado 8, al artículo 36, apartado 2, al artículo 39, apartado 2, al artículo 45, apartados 1 y 3, letras a) y c), al artículo 48, apartados 1 a 4 y 6, letra c), al artículo 49, apartados 2, segundo guión, y 3 a 5, al artículo 50, apartado 1, párrafo primero, letra c), al artículo 52, apartado 1, al artículo 57, apartados 1, párrafo segundo, letras d) y c), y 3, primera frase, así como al artículo 65, apartado 2 de la referida Directiva y

— al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9, 34, apartado 2, 52, apartado 3, y 57, apartado 3, segunda frase, de la Directiva 2004/17.

2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.

(¹) DO C 211, de 8.9.2007.